

Patrones socio-espaciales de la violencia político-electoral en México y sus efectos en la democratización.

Ricardo Cortés Padilla

En las últimas dos décadas, México ha experimentado un incremento sostenido de la violencia en múltiples ámbitos de la vida pública, fenómeno que ha impactado de manera particular los procesos político-electorales.

En este contexto, la violencia político-electoral se ha consolidado como un problema público de alta relevancia, al afectar directamente las condiciones bajo las cuales se desarrollan los procesos democráticos. En México, los asesinatos, amenazas e intimidaciones contra candidatos, funcionarios públicos y actores políticos han sido recurrentes en distintos procesos electorales, particularmente a nivel subnacional. Tan solo en el proceso electoral de 2017-2018 se registraron al menos 145 víctimas y en el 2023-2024 se registraron más de 300 casos de violencia relacionadas con actividades político-electorales, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y su impacto en la vida democrática del país.

No obstante, uno de los principales vacíos en la literatura radica en la comprensión de la **dimensión territorial** de este fenómeno. La evidencia empírica sugiere que la violencia político-electoral no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional, sino que presenta **patrones socio-espaciales diferenciados**, concentrándose en determinadas regiones, estados y municipios. Esta distribución desigual está asociada a factores estructurales y coyunturales, como la presencia de organizaciones criminales, la fragmentación política, la competencia electoral y la debilidad institucional. En este sentido, investigaciones recientes han mostrado que los grupos del crimen organizado no solo buscan maximizar beneficios económicos, sino también establecer formas de control político y territorial, utilizando la violencia como un instrumento para capturar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos electorales.

Más allá de su distribución territorial, la violencia político-electoral tiene profundas repercusiones sobre la calidad de la democracia. La violencia distorsiona la competencia electoral, ya que puede eliminar o inhibir candidaturas, favorecer a determinados actores políticos o alterar las condiciones de equidad en la contienda.